

**Honduras 2012:**

# **El año de las insolvencias de Estado**



NO COPIAR

**FOSDEH**

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras  
Col. Aklameda, Ave. Tiburcio Carías Andino,  
Casa No. 1011, Tegucigalpa Honduras  
Tel: 504 2239-3404

E-mail: [contacto@fosdeh.net](mailto:contacto@fosdeh.net)

[www.fosdeh.net](http://www.fosdeh.net)

Honduras, Enero, 2013



@fosdeh



[www.facebook.com/fosdeh](http://www.facebook.com/fosdeh)

Esta publicación fue realizada gracias al apoyo de:



La elaboración de esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido del mismo es responsabilidad de Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y no necesariamente refleja el punto de vista de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.\*

NO COPIAR

## La economía de Honduras, un mapa de sombras

El 2012 es el año de la insolvencia del Estado para cumplir sus compromisos fundamentales, y esa crisis económica inevitablemente adquiere connotaciones sociales y políticas en un contexto electoral. De hecho, si habría que dibujar la economía hondureña, tendría que ser un mapa de sombras.

En términos generales, Honduras experimentó este año una contracción económica más aguda que la esperada.

La crisis ha expuesto, una vez más, las debilidades estructurales relacionadas con el bajo crecimiento, la dependencia económica de recursos externos y las bases tributarias estrechas. Pese a que cada año las recaudaciones tributarias aumentan; los recursos públicos escasean.

En general, la economía hondureña es pequeña, abierta y altamente dependiente de países desarrollados (comercio, crédito y remesas), con alta vulnerabilidad a desastres naturales y mayor pobreza, sobre todo en áreas rurales.

El impacto combinado de esos factores es mayor en el agro, cuya crisis es profunda, tanto la silenciosa (falta de regularización de propiedad de la tierra, falta de acceso al crédito y tecnología, vulnerabilidad a cambios climáticos y desastres naturales e inseguridad alimentaria) como la crisis violenta que tiene como escenario el Aguán y otros territorios. Más de 60 personas ligadas a la lucha campesina en el Aguán murieron este año víctimas de una violencia que no cesa.

La problemática del agro, que tiene múltiples facetas, como la migración sistemática del campesinado o la implantación del crimen organizado, afecta con intensidad los hogares encabezados por mujeres. El Aguán se está poblando de viudas y huérfanos, como ocurre también en los barrios marginales de las ciudades y en otras regiones de nuestra nación.

En las ciudades principales e intermedias el panorama también es preocupante, con el incremento de la violencia, el desempleo y la subocupación, desintegración familiar y deterioro crónico de los servicios públicos, en particular el acceso al agua. Esa situación frustra a quienes la venimos denunciando desde hace años, sin que las autoridades, que la conocen perfectamente, hagan algo real por transformarla.

Bajo esas condiciones, entre agravamiento e indiferencia oficial, el peor de los pronósticos se está cumpliendo: que a la crisis política (que tiene su propia expresión de violencia ideológica) se sumaría la económica y la social. Ello explica, de alguna manera, que el país aún se encuentre estancado en la crisis del 2009, con una institucionalidad frágil, con impunidad de las violaciones a los derechos humanos, afianzamiento del Estado patrimonial en beneficio de una élite económica, falta de respuesta efectiva a las demandas sociales de la población y vigencia de una polarización ideológica que impide acuerdos.

### **Inversión pública en caída libre y privada**

La empresa privada invierte poco y la inversión pública es mínima, entonces ¿para dónde va el dinero? En un país donde el Estado sigue siendo actor clave para la generación de empleos, una y otra vez se pone de relieve la necesidad de establecer un verdadero programa de inversión pública de mediano y largo plazo, donde queden claramente estipuladas las prioridades, los recursos necesarios para ejecutarlo y las responsabilidades de las diferentes instancias públicas.

Como en otros sectores de la administración, la vieja institucionalidad encargada de la inversión pública prácticamente ha desaparecido y la nueva no arranca o arranca bajo condiciones poco claras, como la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público – Privadas (COALIANZA). Las alianzas público – privadas no son malas per sé, pero las mismas debe ser para el beneficio de las grandes mayorías del país, y de ninguna manera operar bajo la discrecionalidad de un pequeño grupo de empresarios y funcionarios que amparados en la Ley de Promoción de Inversiones buscan únicamente un beneficio privado. En este caso preocupa que COALIANZA debiera funcionar como una instancia supeditada al gobierno, pero en la práctica parece el gobierno supeditado a COALIANZA. El país no puede volver a repetir experiencias similares que resultaron finalmente fallidas y trágicas, como la CONADI. En esa dirección, el 2012 se fue sin que la Secretaría de Finanzas revelara información clave a la ciudadanía, entre ellas ¿cuál es sacrificio fiscal que provoca COALIANZA? o ¿Cuántos son los montos afectados por el concesionamiento de recursos?

En el contexto agravado de las condiciones sociales, institucionales y de seguridad, no todos son perdedores en el año. Los bancos, por ejemplo, fueron los menos afectados en sus utilidades, ratificando que el nivel de inequidad económica fue mayor en el 2102 que en el 2011. Esto significa que en lugar de disminuir, la inequidad económica está aumentando.

Según estadísticas oficiales (CNBS), el sistema bancario privado cerró el octavo mes del presente año con una acumulación de ganancias por la suma de 2,715 millones de lempiras. En comparación con el periodo enero-agosto de 2011, cuando las utilidades alcanzaron 2,017.4 millones de lempiras, el aumento es de 697.6 millones de lempiras y 34.6% en valores porcentuales. Las ganancias acumuladas totalizaron 2,826.8 millones de lempiras el año anterior, calculándose para el cierre de 2012, que la rentabilidad de la banca comercial rozará 4,000 millones, con un alza entre 1,100 y 1,200 millones de lempiras.

Las utilidades proceden, principalmente, de la colocación de préstamos y de la inversión en títulos valores del gobierno. Los bancos han sido los principales compradores de las constantes emisiones de bonos gubernamentales, que salen al mercado con tasas comerciales de entre 9% y 13% de interés y pagaderos, en su mayoría, a corto plazo. Un dato relevante es que de mediados de año hasta la fecha (diciembre) cada vez es más difícil encontrar compradores de bonos, lo que dificulta la ejecución de presupuestos de las instituciones autónomas o semi autónomas a las que el gobierno canceló parte de sus compromisos financieros con esos papeles.

#### **Esas cifras que dan escalofrío**

La Deuda Pública Interna acumulada al mes de Septiembre de 2012 está compuesta por Deuda Bonificada (99%), equivalente a 51 mil 810.1 millones de lempiras y el restante 1% por Deuda No Bonificada, equivalente a 737.8 millones de lempiras. De igual manera se mantiene un monto de Pérdidas Cuasifiscales por la suma de 11 mil 215.5 millones.

En cuanto al vencimiento de la Deuda Pública Interna, 15% de la cartera (LPs. 7,945.6 millones) vence en un período menor a un año, mientras que el monto mayor de vencimientos está en un plazo entre 1 a 5 años, que representa 82%, es decir, 42 mil 849 millones, mientras que el 3.1% restante está a plazos de seis años en adelante.

De hecho, la liquidez bancaria, poco dada al riesgo de la inversión productiva, ha propiciado en una primera etapa el acelerado endeudamiento interno del país.

#### **Financiamiento del presupuesto a través de la deuda**

Eso de programar los egresos sin tomar en cuenta los ingresos es una costumbre inveterada. Es evidente, siguiendo esa tradición, que el presupuesto 2013 será ejecutado a partir de nuevo endeudamiento, que servirá también para el pago del servicio de la deuda hasta ahora contratada. El hecho de recurrir a los préstamos para salvar la situación amerita la formulación de una estrategia de endeudamiento y desendeudamiento público que esté plenamente articulada a la política monetaria del país a fin de que exista un mayor control sobre los bonos públicos y en el impacto de las tasas de interés.

Los bonos son un instrumento aceptado en el mercado financiero y un recurso al alcance de las finanzas públicas, pero su empleo debe ser responsable puesto que su pago compromete gobiernos y generaciones futuras.

Lo anterior implica que todo presupuesto anual debe consignar un techo real de endeudamiento y de gasto público, teniendo sumo cuidado en la “deuda flotante”, misma que debe ser reflejada en los diferentes informes elaborados por la Secretaría de Finanzas.

Mientras las calificaciones de riesgo de la banca en Honduras permanecen estables, las del país van en deterioro. La economía hondureña estuvo lejos en el 2012 de generar suficientes puestos de trabajo de calidad, y la economía sigue atada al flujo de las remesas que envían los migrantes.

En general la evolución de la economía y las decisiones de política económica y monetarias adoptadas por las autoridades en 2012 siguen influidas por los efectos de la crisis política 2009-2010-2011 y por sus debilidades crónicas, entre ellas importar el doble de lo que exporta. En el balance se reitera que la clase política no entiende, ni sabe cómo resolver, los problemas de la violencia y la delincuencia, ni los temas de desarrollo económico, generación de empleo y reducción de la pobreza.

Los diferentes “paquetazos fiscales” siempre sirven para tapar uno que otro agujero del presupuesto, pero no articula la reforma fiscal que demandan sectores ciudadanos y organismos internacionales. De la base registrada de 65,000 contribuyentes, 805 son considerados grandes contribuyentes, pero en realidad son más recaudadoras de impuestos y en esa condición aportan el 80% de los ingresos tributarios nacionales.

#### **¿A cuánto asciende el sacrificio fiscal del país?**

Unos 114 decretos emitidos en las últimas tres o cuatro décadas comprenden el universo legal en donde se sustentan las exoneraciones fiscales a 16 sectores. Es así como entre 2006-2011 se brindaron exoneraciones por casi 56,086 millones de Lempiras, según consta en un estudio denominado “Decretos de leyes existentes en el país por conceptos de incentivos y exoneraciones efectuados por la Dirección general de control y franquicias aduaneras de la Secretaría de Finanzas”. Dependiendo del giro económico, social o político de cada sector se les exime del pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Activo Neto y de la Aportación

Solidaria Temporal, así como exoneraciones aduaneras, entre otros gravámenes. El gobierno de Lobo ha impulsado en el transcurso de sus dos años y medio de gobierno al menos unos 30 “reformas fiscales”, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras).

Diversos estudios concluyen la necesidad de un Pacto o Acuerdo Fiscal que de sostenibilidad a las políticas públicas orientadas hacia objetivos productivos y sociales que beneficien a la mayoría de la población; esenciales para acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Ahora bien, ante la pregunta de si ese pacto será posible a corto plazo, la respuesta es no.

En materia fiscal se insiste, con razón, en el fortalecimiento de la DEI, pero esa medida no basta. Por ahora pagan más los que menos ganan, y los que ganan más son favorecidos con una generosa política de exenciones.

A los pobres, más bien, a los más pobres, afines al partido de gobierno se les compensa con la distribución de bonos y subsidios, pero en realidad pagan más de lo que reciben. De paso, esa política asistencial y clientelar se expande sin financiamiento sostenible y presiona las reservas monetarias internacionales, cada vez más menguadas en las bóvedas del Banco Central.

Hondutel y la Empresa Nacional Portuaria que en el pasado contribuían a aliviar la situación financiera del gobierno central han perdido esa capacidad, y en lugar de generar, demandan inyecciones públicas multimillonarias para evitar su quiebra. La situación de ambas se parece cada vez más al desastre de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con unas finanzas insostenibles, sin capacidad para pagar la deuda anual a los generadores privados, carente de recursos para contratación de más energía y arrastrando un déficit equivalente a un trimestre de suministro.

En ese contexto, para el gobierno de Lobo los desafíos más importantes para el 2013 no son propiciar reformas estructurales en la economía, sino evitar caer en el vacío, y tratar de evitar que la crisis de la economía se transforme en una derrota electoral en los comicios que habrá a fin de año.

En vista de lo anterior, sus objetivos principales son incrementar los ingresos tributarios, financiar sus políticas de asistencia social y seguridad, aliviar algo la situación financiera de las empresas estatales y la reapertura de los flujos externos de capital, inversión privada y cooperación multilateral y bilateral. Si fuera posible, la expectativa incluye la suscripción de un nuevo acuerdo con el FMI, pero en un año político electoral ese objetivo es incierto.

Mientras tanto, para la mayoría de la población el desafío fundamental es sobrevivir.

## Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2013

### ¿Un proyecto participativo?

La Secretaría de Finanzas inicio a mediados de año la elaboración del ante proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013, mismo que está a punto de ser aprobado por el Congreso Nacional. En principio, de manera directa, involucra a las 53 instituciones que componen la administración central y 35 organismos del sector descentralizado. La administración del presidente Porfirio Lobo Sosa pretende disponer para el Gobierno Central de unos 90 mil millones de lempiras para el año entrante.

El incremento presupuestario es constante en la historia del país. Entre 2011-2012, la administración central aumentó su partida de 75,675.3 a 79,558.7 millones de lempiras, o sea 3,883.4 millones (5.1%). Por su parte, las instituciones descentralizadas lo incrementaron de 57,613.1 a 64,779.5 millones, equivalente a 7,166.4 millones más (12.4%)

Como lo manda la ley, el Congreso Nacional tiene bajo su responsabilidad la aprobación del nuevo proyecto de Presupuesto General de Egresos e Ingresos para el 2013. Preocupa que no se advierte cambios respecto a la manera tradicional de discutir y aprobar el único instrumento de planificación para el desarrollo con que cuenta el país. Como en años y gobiernos previos, los diputados hacen uso ilimitado de su voluntad política para tomar una decisión que involucra a toda la sociedad.

No se puede obviar que el Congreso Nacional, al igual que la mayor parte de la institucionalidad pública, está afectado por una profunda crisis de credibilidad. Los recientes sucesos que lo involucran con la defenestración de la Sala de lo Constitucional no hacen más que minar la legitimidad del Legislativo. Por si fuera poco, el contexto de las finanzas públicas muestra una situación grave e incierta.

El efecto inmediato de aprobar un Presupuesto General de la República sin el debido consenso y sin rigor técnico será más insolvencia y más ingobernabilidad. Los diputados deben tener claridad sobre las repercusiones de sus hechos y definir el objetivo central de la estrategia económica nacional para el año entrante. Simplemente hay que entender que Honduras está necesitada de políticas de corto y mediano plazo que le devuelvan la posibilidad de pensar en el largo plazo. La razón y no la demagogia electoral, ni el populismo político, deben dictar la política presupuestaria de nuestro país.

¿Cuáles son las preocupaciones centrales del FOSDEH en este tema?

**Sobre las disposiciones en general, el FOSDEH indica lo siguiente:**

- Existe un claro divorcio entre la Política Presupuestaria establecida para el 2013 y el contenido de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2013, concretamente en temas como el control de los gastos extra presupuestarios, inversión pública y endeudamiento público, lo que no permite tener un concepto claro de cómo y bajo qué prioridades se manejará el presupuesto.

- Mantenemos nuestras reservas sobre el grado de cumplimiento que tendrán las disposiciones presupuestarias a nivel de los funcionarios públicos, puesto que históricamente poco se han respetado. Este aspecto evidencia la necesidad de contar con una evaluación en torno a su cumplimiento durante el 2012, previo a la aprobación de las nuevas disposiciones 2013.
- El documento de disposiciones es altamente complejo por la densidad de artículos que proponen, evidenciando la necesidad de la Secretaría de Finanzas por controlar, de alguna manera, temas sensibles como el de sueldos y salarios, contrataciones, gasto corriente, entre otros. Ante esto llamamos la atención en la necesidad para que a corto plazo puedan elaborarse / reformarse leyes como la Ley de Servicio Civil, que incorpore el tema de sueldos y salarios.
- Existe una sobrecarga de responsabilidades a nivel de la Secretaría de Finanzas, muchas de ellas que deben ser asumidas o compartidas por la Secretaría de Planificación, el Banco Central o del Tribunal Superior de Cuentas, especialmente en lo concerniente al otorgamiento de prioridades a nivel de proyectos o en los dictámenes de endeudamiento público.

#### **Sobre los mecanismos de control del presupuesto:**

- Es necesario readecuar el monto de las sanciones establecidas a funcionarios que se excedan en su presupuesto y que las mismas se calculen a partir del peso mismo de la violación cometida. Lamentamos que el Decreto Ejecutivo que sancionaba a los funcionarios “gastones” hasta el momento no haya sido publicado en La Gaceta y que por lo tanto no esté en vigencia, lo que deja impune a los funcionarios de la actual administración.
- A la luz de lo ocurrido en presupuestos anteriores y el actual, es necesario que exista un posicionamiento claro por parte de la Secretaría de Finanzas, en conjunto con la ciudadanía, para que el Tribunal Superior de Cuentas recupere su función interventora / preventiva para el control de los recursos públicos a fin de que este ente no se limite a un control únicamente “a posteriori” de la actuación pública.
- Es necesario que las modificaciones presupuestarias sigan tratándose como excepciones, pero en aras de lograr este fin se propone que para el 2013 las modificaciones se reduzcan a 20, mismas que deben ser aprobadas únicamente para el tercer y cuarto trimestre del año.
- Es urgente que la Secretaría de Finanzas establezca un mecanismo, ampliamente participativo (ciudadanía, gabinete económico, órganos contralores, SEPLAN), que le dé seguimiento técnico al cumplimiento de las disposiciones presupuestarias.
- Las acciones de control y seguimiento técnico y administrativo se concentran a nivel del Gobierno Central, razón por la cual es necesario ampliarlo a las instituciones descentralizadas, desconcentradas, empresas públicas, autónomas.
- Desarrollar un proceso de recuperación de las finanzas de las empresas públicas y los institutos de previsión para que el peso de sus deudas / pérdidas no continúe comprometiendo de manera desmedida las finanzas del gobierno.

NO COPIAR

## Lo social, ese buque fantasma del gobierno

En Honduras la inequidad persiste como la fuente de muchos problemas sociales. Las desigualdades tienen una estrecha relación con el logro educativo, acceso a posiciones de poder y de decisión de la sociedad, el incremento de la violencia social y la capacidad o incapacidad de una sociedad de lograr mayores niveles del bienestar para cada uno de sus miembros.

Desde este punto de vista, en el 2012 persistió la ausencia de políticas públicas de equidad para mejorar el acceso a oportunidades de la mayoría de la población. Las estadísticas del PNUD indican que 68.9% de la población hondureña vive debajo de la línea de pobreza. La situación de vida es peor para los sujetos más vulnerables, como los campesinos que trabajan en las laderas de las montañas y la mayoría de los hogares encabezados por mujeres.

Las brechas de la inequidad en lugar de disminuir, se ensanchan. El nivel de inequidad económica medido por el coeficiente Gini aumenta año con año. Paradójicamente, los pobres pagan 41% de sus ingresos en impuestos, mientras que los adinerados apenas pagan 19%. Bajo esas circunstancias, aumenta la imagen del empresario como explotador y ajeno al interés nacional, pero también se refuerza la imagen del movimiento social organizado como débil, fragmentado y propenso a la corrupción y al clientelismo político.

En el 2012 se marca uno de los períodos más débiles de la organización social hondureña, especialmente entre el campesinado, pese a la beligerancia agrarista en el Aguán (nor-oriental del país). La mayoría de las grandes organizaciones campesinas desaparecieron o tienen tan escasa presencia que no se advierten. Desde el Instituto Nacional Agrario, su director agrega una cucharada adicional de preocupación: esas organizaciones reciben anualmente fondos millonarios del Estado que nadie fiscaliza, ni los organismos contralores, ni las "bases" agremiadas.

Por su parte, del movimiento obrero se mantienen las limitantes generales que le han sido observadas, entre ellas el desfase de su dirigencia, su conservadurismo para proponer cambios y su tendencia a potenciar la denuncia con poca capacidad propositiva.

De los gremios, el que mantuvo este año una dinámica de confrontación permanente con el gobierno es el magisterial, cuyos reclamos mezclan su adhesión política al partido Libertad y Refundación (Libre) y sus demandas económicas. El cálculo político está presente en todas las posiciones confrontadas, de una y otra parte. En esa guerra de *alta intensidad* son los escolares los que salen perdiendo. El acuerdo tácito de gobierno y maestros de no aplazar a ningún niño de primaria y promover todos al grado superior, independiente de si está preparado o no, refleja la culpabilidad de quienes han convertido el sistema educativo nacional en un desastre, pero al mismo tiempo es una decisión que en la perspectiva de los años por venir causará un grave daño a Honduras. ¿Qué preparación tendrá nuestra niñez para afrontar los graves retos del futuro?

### **Compensación sin acumulación**

Frente al incremento de las inequidades, en particular de la pobreza, la respuesta del gobierno se reduce básicamente a multiplicar las políticas compensatorias a través de programas y redes de protección social. En ese sentido el programa Bono 10.000 es el más importante de los

promovidos por el Estado y en el último año se expande de las zonas rurales a las urbano-marginales.

Reducir la inequidad en Honduras es un desafío central, pero no hay propuestas sostenibles al respecto y como tema estuvo ausente de las ofertas en las elecciones primarias e internas realizadas en noviembre pasado.

Dentro de la inequidad se incluye a las desigualdades – no únicamente las relativas al ingreso per cápita- que se consideran injustas, innecesarias y socialmente remediabiles.

¿De cuáles inequidades se habla? El informe anual de desarrollo humano del PNUD destacó cuatro ámbitos o dimensiones de la inequidad: inequidad económica; inequidad social; inequidad política; y, las inequidades en el acceso a justicia.

En este sentido, se consideran inequidades aquellas disparidades que están más allá de la voluntad de las personas y que se basan en el acceso diferencial a oportunidades por razones de clase social, género, etnia y el ámbito geográfico en que viven las personas.

### **El hambre, compañera cada vez más frecuente de la inequidad**

En Honduras hay más de 1,5 millones de personas (22% de la población) que sufren de hambre y desnutrición. El problema nutricional es más grave en las zonas rurales que en las zonas urbanas, ya que, en el campo, 42% de los niños se encuentra en condición de desnutrición crónica, y en las zonas urbanas alcanza 25%. Esto significa que casi la totalidad de los hondureños que viven en el campo son pobres y tienen problemas para alimentarse correctamente. En la zona sur y regiones de similares condiciones agroecológicas, la pobreza y el hambre, constituyen un problema estructural y no coyuntural, que normalmente afecta a los hogares con escasos medios de vida y bajos ingresos, lo que les restringe el acceso a alimentos a través del mercado.

El problema de la seguridad alimentaria en Honduras no es solamente un problema técnico de producción de alimentos, sino también de falta de poder adquisitivo de los grupos más necesitados, rurales y urbanos. Además, este problema se ve agravado por la desigualdad en la distribución de los ingresos y de los bienes de capital. Por ejemplo, la concentración de la tierra en el país es muy elevada. El 2,6% de los productores poseen 46,6% de la superficie total con un promedio de parcela de 185 hectáreas (ha.). A su vez, el 62% de los agricultores tienen menos de 1,3 ha. Y concentran en su conjunto sólo 7,8% de la superficie total cultivable. Dicho de otra manera, de un total de 330.000 productores, 205.000 son pequeños agricultores pobres, de los cuales 20% no tienen seguridad sobre la tenencia de sus tierras y 42% comparten, arrienda o están bajo otro tipo de arreglo. Además, el 36% del total de productores no tienen tierra (Banco Mundial). La producción nacional de granos básicos es un factor clave para la seguridad alimentaria del país, pero su producción en manos de miles de familias campesinas asentadas históricamente en las peores tierras de ladera, la vuelve muy vulnerable a cambios climáticos. El saldo entre la producción interna y la demanda total es deficitario para el maíz, considerado el cultivo mayormente producido y el alimento más consumido por la población hondureña.

## ¿Paramilitarismo de nuevo tipo?

Por otra parte, los defensores de derechos humanos en Honduras continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización.

Algunos organismos internacionales han solicitado al gobierno de Porfirio Lobo la creación urgente de un programa de protección, pero ante esa posibilidad se responde con anteproyecto de leyes, pero no con acciones.

Ninguna acción ha podido evitar que este año prosigan las muertes selectivas de personas, con un patrón similar de ejecución e impunidad que hace temer el surgimiento de un paramilitarismo de nuevo tipo; con algunas diferencias al de los años 80, pero siempre con un trasfondo ideológico muy fuerte.

Términos de la fenecida *guerra fría* reaparecieron en el escenario nacional. Algunos empresarios y banqueros volvieron a atribuir las causas del conflicto hondureño a la presencia o actividad de “*los comunistas*”, lo que atenta contra el derecho a la vida de muchos.

Ante ese panorama, los activistas por los derechos humanos preguntan: “¿De qué servirán más leyes si es la impunidad la que anula todo esfuerzo por implantar justicia?”.

En el 2013 el FOSDEH ha subrayado que el agravamiento de la situación económica y social para la clase media y los sectores con menos recursos, propicia un marco de demandas que suelen ser violentamente reprimidas u hostigadas. Democratizar la economía resulta clave para fortalecer la vigencia de los derechos humanos.

Mientras ello no ocurra seguirá el deslave de mano de obra con una emigración incesante, pese a las cada vez más inhumanas condiciones de ese “exilio”. De hecho, todo el país puede considerarse “territorio en fuga”. Se estima en un millón cien mil los hondureños emigrados. Su ausencia no es fortuita, sino propiciada por un modelo de economía que le interesa ver más a los asalariados fuera, que dentro del país.

## Por dónde van los tiros

En Honduras se polemiza si el país tiene o no la mayor tasa de homicidios del mundo. Pasó de contabilizar 51 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2001 a 92 en 2011, según el informe "Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas", difundido por Naciones Unidas.

El debate es, en alguna manera, bizantino porque, más o menos exactas, las cifras siempre son alarmantes. El más reciente informe del Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) reporta la disminución de los homicidios en 6% en relación con los registros de 2011 pero implica que de enero a junio de 2012 se registran 3,373 homicidios, y en el desglose departamentos como Cortés, Atlántida, Olancho y Colón parecen escenarios de guerra.

En el registro de causas de las muertes, según el informe del Observatorio, el ajuste de cuentas presenta el mayor número con 421; siguen las riñas interpersonales con 112 casos y el robo o tentativa con 83.

El sicariato es ya un fenómeno extendido. En contraste con otros años, las muertes relacionadas con maras son apenas 28, lo que es en sí una buena noticia. No obstante, la violencia, en sus expresiones más dramáticas y brutales, se ha venido imponiendo como la estrategia para resolver conflictos o diferencias en el país.

De cumplirse la previsión policial de que en 2012 habrá menos homicidios que en 2011 será la primera vez que ocurre una tendencia reversible en la última década. Sin embargo, las malas noticias se imponen.

### **La mano criminal de policías**

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, presentó a fines de año un informe sobre la criminalidad policial que justifica todos los esfuerzos para que continúe el proceso de depuración de la Policía Nacional. Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, en los últimos 23 meses, 149 personas han muerto a manos de quienes deberían defenderlos.

De total de víctimas, 92 fueron asesinadas durante el 2011 y 57 en el curso del 2012, en su mayoría son jóvenes de 20 a 34 años de edad, lo que representa un 60.4 por ciento de las personas que han muerto a manos de agentes policiales.

"Podríamos valorar que la disminución en los asesinatos se debe a la presión de la ciudadanía y a ciertos controles de las autoridades, pero es lamentable que los agentes sigan matando personas", dijo la Rectora.

"El principal instrumento de muerte son las armas de fuego, que se compran con el impuesto de todos nosotros, el presupuesto que se da a la Secretaría de Seguridad se utiliza para victimizar a la población", añadió.

En las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se concentra la mayor cantidad de policías que atentan contra la ciudadanía hondureña, se registran más de 15 homicidios, por lo que requieren de mayor supervisión, consideró Castellanos.

El informe contiene otros delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, el robo, privación ilícita de libertad, tortura, lesiones y evasión culposa.

Esta violencia es un fenómeno de alta complejidad, de naturaleza multicausal y con expresiones multidimensionales. Una primera afirmación sobre sus causas pasa por la necesidad de señalar como circunstancias propiciadoras o fértiles el incremento de la pobreza, exclusión, corrupción, tráfico y consumo de drogas, crimen organizado fuera y dentro de la policía, falta de empleo, inestabilidad laboral, imposibilidad de satisfacción de necesidades básicas para el grueso de la población, proliferación de guardias privados, abandono de los hogares por el éxodo de los emigrantes, incremento del poder privado e impunidad de grandes capitales que no suelen ajustar sus prácticas a la ley.

También están los factores de tipo más subjetivo que tienen que ver con la cultura predominante en la sociedad hondureña, plagada de discriminación, intolerancia, desconfianza e incapacidad para el diálogo, que, además, es reproducida a diario con mensajes en los medios de comunicación o en cualquier otra esfera social y política.

En este punto puede ubicarse el incremento de la violencia política e ideológica, con múltiples violaciones a los derechos humanos.

Al margen de sus propias condiciones internas, Honduras sufre las consecuencias del recrudescimiento de la guerra contra el narcotráfico en México, o, al menos, contra una parte del narcotráfico.

En los últimos tres años se expandieron las regiones del territorio hondureño bajo el control o presencia armada de los narcotraficantes, sobre todo en zonas fronterizas a Guatemala y próximas a la costa caribeña, sitio preferido para el aterrizaje de avionetas cargadas de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia.

Los decomisos de drogas y el descubrimiento de laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína fueron constantes en el 2012, pero siempre son apenas la muestra de un negocio cuya magnitud es desconocida.

Esa situación convirtió este país en prioridad para la política exterior de EEUU, que mantuvo su respaldo a los procesos de reforma de la seguridad pública en marcha.

En el balance de la violencia es necesario citar siempre las múltiples formas de abuso que enfrentan las mujeres por razones de género, con los feminicidios en aumento. En los últimos dos años, con una población femenina de alrededor de cuatro millones, fueron asesinadas más de 1.200 mujeres, una cada 18 horas. Las cifras son aproximadas y no hay un recuento oficial riguroso. La violencia contra mujeres y jóvenes es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas y aumenta año tras años. Un fenómeno similar, calificado como “crímenes de odio”, se multiplica también en contra de la comunidad LGTBI, sin que se investiguen los casos y se haga justicia.

### **La violencia contra las mujeres**

Según la organización Nobel Women's Initiative, Honduras tiene hoy la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo y, en la última década, los feminicidios aumentaron un 257%. En su página web, la asociación resume las conclusiones de una delegación de mujeres encabezada por Rigoberta Menchú y Jody Williams (ganadoras del Premio Nobel de la Paz en 1992 y 1997, respectivamente) que viajó a México, Honduras y Guatemala a principios de año para investigar la violencia contra la mujer en la zona.

Según un estudio elaborado por Oxfam Internacional, los feminicidios en Honduras en la última década aparecen vinculados a tres factores: las redes del crimen organizado, la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, entendiendo por esta última la mayoría de los crímenes cometidos por acoso sexual. Pero además, desde junio de 2009, se ha puesto en evidencia un tipo de feminicidio asociado a la represión policial y militar por motivos políticos, contabilizándose más de 450 casos de ataques físicos y sexuales por este motivo.

El informe, titulado “Impunidad: un grito sin respuesta”, fue elaborado tras dos años de seguimiento de la situación en el país, dentro de una campaña conjunta con la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios en Honduras.

Sin embargo, el mayor porcentaje de ataques contra las mujeres se sigue dando entre los vinculados a las redes del crimen organizado. En el caso de las maras, los “ajustes de cuentas” entre pandillas son los más frecuentes, agrediendo física y sexualmente a las mujeres relacionadas sentimentalmente o por parentesco con alguno de los hombres de la organización. Incluso, familiares de las víctimas entrevistados para el informe acusaron a los cuerpos policiales directamente de muchos de estos crímenes por motivos de venganza contra las pandillas.

Estas muertes representan el 13% de los delitos contra las mujeres frente al 22% de los específicos de las redes del narcotráfico, víctimas de la explotación sexual y del tráfico de drogas, por “no haber seguido órdenes” o no entregar parte del dinero que reciben de sus actividades.

La violencia de género en el ámbito doméstico por su parte, sigue siendo la segunda causa de feminicidios en el país, pese a la aprobación en 1997 de la Ley contra la Violencia Doméstica, lo que resalta la ineficacia de la legislación vigente.

## El saldo de unas elecciones “estilo Honduras”

Las elecciones primarias e internas recién pasadas fueron las más caras y probablemente vacías de contenidos en la historia de Honduras. En el contexto de gravísimas condiciones económicas y sociales, con la mayor deuda interna y externa jamás acumulada, con un gobierno en total insolvencia (incapaz de cubrir los sueldos y salarios de sus empleados), resulta incongruente y hasta ofensivo que el Estado haya destinado cerca de 800 millones de lempiras para acompañar la ambición de políticos que no se juegan su suerte en las urnas, sino en las mañas.

Los políticos, por su parte, posiblemente invirtieron una suma similar, sobre todo liberales y nacionalistas, sin que haya un organismo contralor con el valor de indagar de dónde salió tanto dinero y cómo se respondía por ello. Se afirma, por ejemplo, que uno de los candidatos nacionalistas perdedores adeuda a un banco privado cinco millones de dólares invertidos en su campaña. ¿Quién pagará esa deuda? No hace falta ser muy lúcido para intuir de donde saldrá el dinero

Al paso que marca la inflación electoral y el ritmo mediático de las campañas, el Estado gastará en total unos dos mil millones de lempiras para asegurar con los próximos comicios el cambio de gobierno, pero no de figuras o propuestas y, probablemente, ni siquiera de partido. Se dice que la democracia es cara, y se puede estar parcialmente de acuerdo, pero al menos debe dar ciertos resultados que la justifiquen o que fortalezcan su defensa frente a los autoritarismos en boga.

### Una opinión calificada

Para el Movimiento Amplio por la Dignidad de Honduras, “las elecciones internas y primarias reconfirmaron la profunda crisis en la que se debate nuestro país desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, caracterizada por la destrucción sistemática de la institucionalidad del Estado, el desgarramiento del tejido social, el progresivo deterioro de la economía, el crecimiento de la corrupción pública, la impunidad que la ampara y la persistente violación de los derechos comunitarios sobre sus territorios y bienes naturales. Todo lo cual se traduce en una pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y sus autoridades, y en una enorme desconfianza de la ciudadanía ante el futuro de la nación hondureña”. Siguatepeque, 9 de diciembre de 2012,

### Las alarmas funcionaron, pero no los correctivos

Tampoco había necesidad de mal gastar tanto dinero para confirmar el déficit de cultura democrática que afecta al sistema político y a la ciudadanía en general, reflejada en unos comicios viciados por múltiples irregularidades (fraude) que evidencian el descrédito de la institucionalidad electoral y de las prácticas políticas tradicionales, que incluyen la impunidad del delito electoral.

Antes del escrutinio entre las irregularidades destacaron reformas a la Ley Electoral y de los Partidos Políticos fuera de los plazos permitidos y al margen mismo de la norma, así como falta de responsabilidad en la inscripción de algunas corrientes internas en los partidos políticos, sin verificar la autenticidad de las firmas presentadas, lo que no sólo encareció el costo de las elecciones sino que se prestó al tráfico de credenciales en los delegados que representaron a cada candidatura en las mesas electorales. El Movimiento Eva y yo (Partido Nacional), por ejemplo, acreditó 14 mil delegados para las mesas electorales (propietarios y suplentes) y, en contraste, su candidata presidencial Eva Fernández apenas obtuvo unos 5,000 votos.

Las irregularidades principales ocurrieron el día del escrutinio, destacando los reportes adulterados de las actas electorales para la casilla presidencial reportadas a través del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), mecanismo por medio del cual el presidente o un miembro de la Mesa Electoral informa de los resultados por teléfono móvil a operadores del TSE en Tegucigalpa que registran los datos.

Los datos del TREP no son legalmente vinculantes, pero los asumen como “finales” los candidatos que llevan la ventaja y que se proclaman “ganadores”, en tanto que los “perdedores los desconocen y exigen, infructuosamente, un nuevo recuento voto por voto.

Además de la manipulación manifiesta del TREP, las irregularidades probadas incluyeron: actas finales de las mesas que llegaron en blanco al TSE, actas adulteradas, actas mal tabuladas en la sumatoria de votos, ausencia total o parcial de firmas de los delegados de las mesas en las actas, manchas corregidas de manera ilegible, actas que contenían más votos de la carga electoral de la urna, actas donde se registran votos a favor de un solo candidato, candidatos que obtuvieron más votos que el número de papeletas recibidas por urna, compra de votos, trasiego de credenciales electorales, etc.

¿La magnitud del fraude? Se desconoce el número exacto de votos involucrados. En algunas fuentes se estima en 100,000. Una empresa auditoria internacional reporta un promedio de 3,500 “inconsistencias”, los departamentos más afectados son también los de mayor carga electoral (Francisco Morazán, Cortés, Olancho...), dentro de los diez días hábiles después de la votación que registra la ley para presentar acciones de nulidad se canalizaron más de 30 demandas ante el TSE y más de 20 denuncias por delito electoral ante el Ministerio Público.

Llama la atención que en contraste con las denuncias, el reporte de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la valoración de los países cooperantes agrupados en el G-16 coinciden en señalar que “el proceso electoral del 18 de noviembre se llevó a cabo de forma libre, justa y transparente y que ha sido el más profesional y técnicamente avanzado que se ha visto en Honduras”. En un tono parecido, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) hizo un llamamiento a los movimientos internos de todos los partidos políticos a que tengan paciencia y “no desacrediten la institucionalidad representada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”

Las denuncias principales de fraude se concentraron en los partidos Nacional y Liberal, pero también hubo casos entre candidatos a diputados y alcaldías al interior de Libertad y Refundación (LIBRE) que llevaba por candidata presidencial única a Xiomara Castro de Zelaya. Más que las irregularidades en sí dentro de LIBRE (que no llegan a la dimensión del problema en los partidos tradicionales), lo más preocupante es la falta de investigación y seguimiento ético a las mismas para sentar precedentes. Bajo una pretendida política de “lavar los trapos sucios en casa”, la puerta en LIBRE quedó abierta para que se repitan los hechos dolosos en el futuro.

### **Las cartas están sobre la mesa**

Al margen de la mancha que supone las denuncias de fraude, las candidaturas presidenciales de Hernández y Villeda Bermúdez son las cartas sobre la mesa de los partidos tradicionales. Ambos candidatos tienen la obligación inmediata de negociar con los “perdedores” el reparto de cuotas de poder para superar la crisis interna, sobre todo en el Partido Nacional, que heredan de las elecciones. Por supuesto, ni Álvarez (representante del ala ultraderechista), ni Rosenthal (representante de un sector del liberalismo en discrepancia con su ala ultraderechista) son un “Manuel López Obrador”. Su resistencia e indignación ante lo que consideran un “despojo” es cuestión de tiempo.

Mientras tanto, en LIBRE el resultado electoral es agrisado. Por un parte, el total de votos recibidos por su candidata presidencial de consenso se acerca a los 600 mil, lo que marca un hecho sin precedentes en el país para una fuerza política emergente. Tanto que LIBRE reclama para sí haberse convertido en la segunda fuerza electoral, desplazando en esta coyuntura específica al Partido liberal. No obstante, el total de votos obtenidos en una campaña electoral donde Xiomara Castro no tenía rivales internas es muy inferior a las expectativas de los dirigentes y activistas de LIBRE, que esperaban entre un millón (mínimo) y dos millones (máximo) de votantes a su favor. Al interior de LIBRE, las elecciones dejan más consolidados en el poder a las tendencias liberales, por encima de las denominadas “izquierdistas”.

Esa circunstancia le da puntos a favor y también en contra. A favor es considerar que el peso liberal puede acercar más el discurso de su candidata a posiciones menos ideologizadas y más próximas al electorado indeciso y centrista. En el otro lado de la moneda, vuelve previsible que la práctica político-electoral de LIBRE sea cada vez más cercana a los partidos tradicionales, fortaleciendo la postulación –también por consenso interno- de figuras públicas denunciadas por participar en el pasado de actos de corrupción.

En perspectiva, para el nuevo partido la verdadera campaña, la que lo enfrentará a la maquinaria bipartidista, es la que está por venir, con los comicios generales de 2013. En ese sentido cabe preguntar: ¿los 600 mil votos obtenidos en las primarias es su techo máximo o puede aspirar a más?, y si la respuesta es que puede aspirar a más, entonces ¿qué cambios deberá tener su estrategia y su discurso para lograrlo?

### **¿Anticipo de la práctica electoral del 2013?**

Con el resultado de las elecciones primarias e internas se evidencia la falla de origen que malogró la transición política a la democracia iniciada en 1982: la creación de reglas e instituciones formales vaciadas de valores democráticos. Quizá lo más aleccionador, si de lecciones se trata, es que el escrutinio del 18 de noviembre terminó siendo un ensayo de lo que puede estar por venir el año entrante de no ocurrir cambios relevantes en el sistema electoral.

Crear nuevas condiciones democráticas implica investigar la muerte violenta de activistas y candidatos políticos ocurridas en el curso de las primarias e internas, impedir que por la vía de la financiación el crimen organizado (especialmente el narcotráfico) siga consolidando espacios políticos territoriales y congresistas, sacar a los políticos del TSE y el Registro Nacional de las personas, bajar el tono confrontativo y visceral de los discursos políticos que es una manera cínica y peligrosa de disimular la ausencia de propuestas y debate, y, en lo fundamental proceder a la *ciudadanización* de los procesos electorales.

¿Hay algo que inventar al respecto? No, ya en el reciente pasado se han expuesto propuestas sustanciales y estratégicas para impulsar una *ciudadanización* de los procesos electorales, pero han sido dejadas de lado y abandonadas por la clase política, con el desdén e impunidad propia de su autismo. Esas propuestas están ahí, siguen válidas y reclamando su vigencia.

En todo caso, el reto es que la ciudadanía organizada rescate del control total de los políticos el proceso electoral y presione a favor de contenidos y propuestas racionales para que el país no termine de hundirse y evitar que la campaña electoral entrante se salde con víctimas innecesarias que jamás serán resucitadas por sus dirigentes.

Es necio dudar que la magnitud del reciente fraude afectó la legitimidad del proceso electoral. En consecuencia el debate no es sí los cambios son necesarios o no; la discusión es cuáles deben ser esos cambios, quienes son protagonistas y cuándo pueden acordarse, tomando en cuenta que hasta el próximo 25 de enero se podrían introducir reformas a la Constitución de la República.

En todo caso, cualquier pacto de gobernabilidad que esté en camino no puede quedar únicamente en manos de los políticos, ni limitado sólo a la política. Los cambios democráticos principales no pueden hacerse al margen de los políticos, pero tampoco de la ciudadanía y sus demandas económicas, sociales y culturales.

La reforma o cambio tiene que incluir la despartidarización del TSE, la profesionalización del RNP, el abaratamiento y control financiero de las elecciones, un efectivo sistema de sanción para los delitos electorales, dar continuidad a las buenas prácticas electorales que también existen (como el voto domiciliario, la separación de papeletas o la oportunidad que se da a que las personas puedan observar el conteo de votos en las mesas electorales) y dotar de propuestas las campañas de los políticos. ¿Será posible lograrlo?

## La cultura, de nuevo marginada

El Plan de Gobierno 2010 - 2014 del presidente Porfirio Lobo considera la cultura para el desarrollo como un agente protagónico para la reducción de la pobreza, combate a la criminalidad y para elevar la tasa de escolaridad y mejorar la competitividad en Honduras. Al menos así lo recuerda el portal de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, sin embargo, el 2012 deja en esta área de la administración pública la decepción de siempre.

La excepción es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica que mantienen un esfuerzo permanente por elevar la cultura del país. La UNAH, en particular, con la reforma que impulsa al exterior y con la renovada vinculación a la problemática nacional, sobre todo en los campos de la seguridad y la salud.

Sin embargo, las pocas estadísticas disponibles ponen de manifiesto las limitaciones de la población en general en cuanto al acceso a la educación formal o a la lectura en general. Sólo tres jóvenes de diez tienen acceso a la educación secundaria y apenas uno a educación universitaria, mientras los libros son un objeto escaso en las escuelas y en los hogares hondureños. De diez escuelas públicas, menos de tres disponen de bibliotecas, y en la mayoría de los hogares no hay libros o no llegan a más de diez.

En Honduras existen 2.6 libros en las bibliotecas públicas por cada 100 personas mientras en los países industrializados existen 294. En cuanto a la producción cultural en términos de libros, películas y otras actividades, la información disponible habla de promedios muy reducidos. Se estima que se publican cinco títulos por cien mil habitantes, mientras que en los países industrializados los títulos publicados se contabilizan en 56 por cada 100,000 habitantes.

Comparativamente, el medio de comunicación que más crece es la televisión si se juzga por el número de receptores, cuya tasa de crecimiento es superior a los promedios internacionales, mientras la circulación de periódicos muestra una tendencia decreciente en los últimos años.

En el acceso a internet por cada mil habitantes existen 8.5 usuarios suscritos al servicio y solamente 4.4 de cada 100 escuelas ofrecen este recurso a los alumnos.

En ese contexto, la debilidad de las estructuras nacionales ocupadas de los asuntos culturales hace que las actividades de ese tipo ubicadas en el sector privado se manejen sin ningún control o criterios éticos regulatorios, tal es el caso de las telecomunicaciones (radio, televisión, televisión por cable, telefonía móvil, internet y periódicos).

En el escaso debate cultural que hay en el país diversos sectores reclaman que el Estado de Honduras invierta en el fortalecimiento de la ciudadanía cultural a través de los consejos regionales, sectoriales y locales de cultura así como el apoyo al fomento al emprendedurismo cultural y a los procesos de estímulo a las industrias creativas y culturales, que ya están generando desarrollo económico en el ámbito local y que han sido previstos en el anteproyecto de la Ley General de Fomento a la Cultura. El fomento de la ciudadanía cultural se planea como un contrapeso al control mediático privado de la libertad de expresión.

No obstante, lo más relevante del año al respecto es el conflicto entre el presidente Lobo y algunos propietarios de medios masivos de prensa, sin que haya trascendido los motivos centrales del pleito.

NO COPIAR

## La consagración de la elite

Sí alguien sostiene que la elite de poder en Honduras, la que en última instancia toma o determina las grandes decisiones públicas, se ha debilitado a partir de la crisis de 2009, habrá que responderle que está equivocado y que en el 2013 está más fuerte que antes.

Al margen de los conflictos de poder e intereses que reflejan sus pugnas electorales, la elite nacional y las elites regionales y sectoriales aún dictan las pautas del país y fijan el destino de muchas personas.

El análisis de la elite de poder actual en Honduras, la que integran una docena de apellidos influyentes, confirma que, directa o indirectamente, es resultado de un largo proceso de configuraciones y reconfiguraciones, a partir de su capacidad para adaptarse, fortalecer su influencia y poder en coyunturas históricas claves del Estado y del contexto comercial y financiero regional e internacional.

Una de esas coyunturas es la que permanece abierta en la administración de Porfirio Lobo. En el 2012 la elite financiera y la ligada a la generación de energía mejoraron sus dividendos. De igual manera lo hicieron poderosos empresarios internacionales que están detrás de los negocios de las telecomunicaciones y de las tarjetas de crédito. Nadie contrala su voracidad y abusos contra la población consumidora de sus servicios.

En otras palabras, la debilidad de la institucionalidad hondureña es la fortaleza de su elite empresarial y financiera, más allá de su propia capacidad productiva y comercial.

En su composición y comportamiento influyen no sólo variables de tipo económico, sino cultural. Como toda elite, la hondureña muestra una gran capacidad para hacer comunes sus objetivos, principios y valores y trasladarlos al resto de la sociedad utilizando para ello los recursos mediáticos disponibles e ideología acorde a sus intereses.

Como lo señalan diversos estudios, los miembros de la elite en el poder comparten similitud de ideas y de mentalidad a raíz de poseer una educación semejante, lazos de amistad, parentesco, vínculos matrimoniales, intercambio de favores e inclinaciones políticas.

Más que el sentido de competencia, el patrón que priva en la elite es el acuerdo referente a sus estrategias frente al Estado para lograr que sus demandas sean satisfechas y que sus intereses fundamentales no corran peligro.

Obviamente no siempre todo es consenso. El desacuerdo al interior de la elite se produce con la mayor o menor capacidad que tengan sus integrantes para adaptarse al estilo de los diferentes gobiernos y *comprar* influencia en los mismos. En ese sentido, no todos los que conforman una

elite tienen la misma capacidad de influencia en la administración pública, determinante tanto en su relación con lo público como con lo privado. ¿De qué depende? La diferencia no es ideológica, es más bien práctica. La determina el grado de penetración alcanzado en la vida política nacional a través del financiamiento a las campañas electorales, promoción de personas de confianza en cargos clave institucionales, control mediático y la participación directa de empresarios o sus familiares más cercanos en cargos públicos.

En el 2012 es evidente que hubo una fractura en la elite respecto a sus preferencias electorales, sobre todo en el Partido Nacional. Unos *jalaban* para el bando del alcalde capitalino Ricardo Álvarez y otros a favor del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

El conflicto rebasó los límites político partidaristas hasta involucrar directamente a los poderes Ejecutivo y Judicial del país. La decisión de la mayoría de los diputados de defenestrar a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional marcha en esa dirección.

En el balance, el conflicto no es tanto Congreso Nacional versus Sala de lo Constitucional; el conflicto es al interior de la elite política y empresarial por disputas de poder, sazonadas con argumentos ideológicos.

En la clausura del 2012, Lobo no es la figura política preferida de la elite, pero es quien tiene la condición de Presidente de la República. Se puede estar contra él, pero no sin él.

NO COPIAR